



# Asamblea General

Distr. general  
17 de octubre de 2024

Original: español

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 100º período de sesiones, 26 a 30 de agosto de 2024

#### Opinión núm. 31/2024, relativa a Argelia Margarita Infante Nares y Yoeimer Alexair Hurtado Infante (República Bolivariana de Venezuela)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 51/8.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo<sup>1</sup>, el Grupo de Trabajo transmitió el 8 de junio de 2023 al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela una comunicación relativa a Argelia Margarita Infante Nares y Yoeimer Alexair Hurtado Infante. El Gobierno respondió a la comunicación el 6 de septiembre de 2023. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
  - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
  - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto (categoría II);
  - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

<sup>1</sup> [A/HRC/36/38](#).



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

## **1. Información recibida**

### **a) Comunicación de la fuente**

4. Argelia Margarita Infante Nares es nacional de la República Bolivariana de Venezuela y ama de casa.

5. Yoeimer Alexair Hurtado Infante es hijo de la Sra. Infante Nares, nacional de la República Bolivariana de Venezuela y Sargento Mayor de Tercera de la Guardia Nacional Bolivariana. Ambos habitan en una vivienda en el sector de las Vueltas, Peña de Mota, parroquia Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas (estado Guárico).

#### *i. Contexto*

6. La fuente afirma que la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante fueron detenidos el 24 de abril de 2022 en su residencia por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, por el supuesto vínculo con la banda criminal del “Tren del Llano”.

7. Estas detenciones se dieron en el marco de la “Operación Trueno”, la cual tiene como objetivo dar con el paradero de colaboradores o cómplices de la banda criminal del “Tren del Llano”. El operativo empezó el 20 de abril de 2022, cuando aproximadamente 800 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad llegaron a Altagracia de Orituco. Horas antes del operativo, el pueblo sufrió un corte de comunicaciones, que se prologó por varias horas. Ese día se llevaron a cabo decenas de allanamientos contra las viviendas de comerciantes y campesinos de la localidad. Durante la primera semana del operativo se contabilizaron más de 40 detenciones.

8. La fuente afirma que los funcionarios llegaron en vehículos civiles, irrumpiendo a la fuerza en domicilios, sin orden judicial de allanamiento, destrozaron y robaron bienes, separaron núcleos familiares (incluyendo niños) y mediante, amenaza de muerte, pidieron que les dijeran el nombre de delincuentes de la zona.

#### *ii. Detenciones y procesos penales*

9. Según la fuente, el 24 de abril de 2022 a las 22.30 horas aproximadamente, 18 funcionarios, encapuchados y sin identificación, pertenecientes al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro rodearon la casa de la familia Infante. En la casa se encontraban la Sra. Infante Nares y su hijo mayor, el Sr. Hurtado Infante quien, siendo Sargento Mayor de Tercera de la Guardia Nacional Bolivariana se encontraba en Altagracia de Orituco por un permiso de 15 días. También había otros miembros de la familia, incluidos niños.

10. De acuerdo con la fuente, siete funcionarios derribaron la puerta, entraron en la casa y tiraron al suelo a la Sra. Infante Nares y a otro de sus familiares. Posteriormente, dos funcionarios la sacaron de la casa hacia el patio agarrándole el brazo y halándola por el cabello. Estando la Sra. Infante Nares en el suelo, los funcionarios le proferían insultos y le preguntaban por el paradero de otra familiar que según las autoridades habría tenido una relación amorosa con un miembro del “Tren del Llano”. Después comenzaron a preguntarle a otro de los familiares y este les dijo que dicha familiar se encontraba fuera del país.

11. Alega la fuente que los funcionarios le pidieron los teléfonos celulares a uno de los familiares y comenzaron a revisar el bolso del Sr. Hurtado Infante. También comenzaron a buscar otros objetos dentro de la casa. Un funcionario le preguntó al Sr. Hurtado Infante si tenía algún problema en los tribunales y él le contestó que ya había salido de ello, que tenía su boleta de salida. Agrega la fuente que el funcionario le respondió: “mira, yo te voy a radiar,

si me estás diciendo mentiras, te voy a partir por la mitad”, y levantó su fusil para disparar. De inmediato, uno de los familiares se colocó delante de él, pero un funcionario lo tiró al suelo y otro funcionario le colocó su bota en la cabeza. Posteriormente, los funcionarios salieron de la casa y tiraron al suelo al Sr. Hurtado Infante, le dieron una patada y lo mandaron a buscar ropa porque se encontraba en ropa interior. Esa noche, tanto la Sra. Infante Nares como el Sr. Hurtado Infante fueron arrestados, la razón fue, a juicio de los funcionarios, porque habían tenido antecedentes policiales.

12. Según la fuente, los funcionarios robaron a la familia Infante. Entre los objetos que se llevaron, se encuentran la moto y la ropa tanto civil como militar del Sr. Hurtado Infante, documentos personales tales como sus cédulas de identidad, tarjetas y licencias de conducir, así como teléfonos celulares y dinero. Estos elementos no fueron reflejados en la cadena de custodia. El 25 de abril de 2022, la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante fueron trasladados a la sede de la Policía Nacional en la ciudad de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Uno de sus familiares se dirigió hasta allá; no obstante, los funcionarios le dijeron que ellos no se encontraban ahí.

13. Argumenta la fuente que, durante tres días, el familiar buscó a la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante en otras sedes policiales, pero no los encontró. Posteriormente, un funcionario le dijo que sí se encontraban en la sede de la Policía Nacional Bolivariana y que les llevara comida porque no habían comido durante esos días.

14. Agrega la fuente que, el 26 de abril de 2022, un familiar denunció lo ocurrido ante la Fiscalía Municipal Primera de Altigracia de Orituco, pero esta Fiscalía no quiso recibir la denuncia alegando que no era de su competencia. La denuncia fue finalmente recibida por la Fiscalía 21ª, en la ciudad de San Juan de los Morros.

15. En San Juan de los Morros, la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante estuvieron a la orden de la Fiscalía 16ª. Los funcionarios de esta Fiscalía le comentaron a su familiar que serían trasladados a la ciudad de Caracas debido a que todos los casos que venían de Altigracia de Orituco los estaban refiriendo a Caracas.

16. Alega la fuente que, el 2 de mayo de 2022, los funcionarios de la Fiscalía 16ª le dijeron al familiar que tenía que pagar 200 dólares para que la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante fuesen trasladados a Caracas. El familiar tuvo que vender sus pocas pertenencias y pedir prestado para cubrir el costo del traslado. La Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante estuvieron aproximadamente 12 días detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana.

17. El 4 de mayo de 2022, ambos fueron trasladados a Caracas para ser presentados ante los tribunales con competencia nacional en terrorismo con el fin de ser imputados por los delitos de asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas y terrorismo, previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

18. De acuerdo con la fuente, los funcionarios alegaron que el Sr. Hurtado Infante se encontraba en su casa con siete personas y que, al entrar en la casa, revisaron el patio y encontraron seis cañones de escopeta, seis culatas de escopeta y un tubo con municiones. Al finalizar la imputación, el tribunal dictó medidas preventivas de privación de libertad.

19. Según la fuente, la Sra. Infante Nares comparte causa penal con otras seis mujeres y un menor de edad que ella no conoce. La fuente añade que los abogados que están atendiendo la causa son públicos, debido a que el tribunal no aceptó defensa privada.

20. El 4 de agosto de 2022 se realizó la audiencia preliminar. Previa negociación con la Fiscalía, y con la condición de admitir los cargos, la Sra. Infante Nares fue acusada únicamente por el delito de asociación para delinquir, el cual admitió para obtener una libertad anticipada. En consecuencia, la Sra. Infante Nares fue condenada a cinco años de prisión. En diciembre de 2022, la defensa pública consignó toda la documentación requerida por el Juez del Tribunal Octavo en Funciones de Ejecución del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas para ordenar su excarcelación, para el cumplimiento condicional de la pena.

21. A pesar de lo anterior, el 28 de diciembre de 2022, el familiar informó que el tribunal de ejecución exigió la suma de 3.000 dólares para tramitar la boleta de excarcelación de la Sra. Infante Nares antes del 24 de diciembre, exigencia que el familiar no acató. De acuerdo

con la fuente, el Sr. Hurtado Infante no admitió los cargos imputados, por lo tanto, su caso pasó al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia exclusiva a nivel nacional para conocer de causas vinculadas con delitos de terrorismo. Agrega la fuente que el juicio ha sido diferido en seis ocasiones.

22. La Sra. Infante Nares se encuentra privada de libertad en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana en El Valle (municipio Libertador, Distrito Capital). El Sr. Hurtado Infante se encuentra privado de libertad en el centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (municipio Chacao, estado Miranda), conocido popularmente como “Zona 7”.

23. Comenta la fuente que los defensores públicos no le han dado copia de los expedientes al familiar de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante. Agrega la fuente que el familiar tuvo que sacar copia al expediente judicial por el costo de 60 dólares.

### iii. Análisis jurídico

24. La fuente argumenta que las detenciones de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante son arbitrarias y se enmarcan en las categorías I, III y V del Grupo de Trabajo.

#### a. Categoría I

25. La fuente sustenta su argumentación en el artículo 9 del Pacto, en el principio 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y en el artículo 44 de la Constitución.

26. Según la fuente, el Estado, en los operativos de seguridad, tiene por costumbre alterar las actuaciones policiales para justificar una detención *in fraganti* con el propósito de legitimar sus actuaciones y conseguir una justificación legal en las detenciones. Este patrón ha sido identificado en múltiples informes de organismos internacionales<sup>2</sup> y también se viene configurando en varios de los casos de detenciones en el marco de la “Operación Trueno”.

27. Tal y como se desprende de los hechos de la detención de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante, esta no fue ordenada por un juez ni fue consecuencia de una situación de flagrancia, sino que fue producto de un abuso de poder por parte de los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, quienes, sin una orden de allanamiento, vulneraron la residencia de la familia Infante, arrestaron a la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante y, posteriormente, los detuvieron con apoyo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes alegaron que el Sr. Hurtado Infante se encontraba en su casa con siete personas más y que habían encontrado seis cañones y seis culatas de escopeta y un tubo con municiones. Sin embargo, señala la fuente que, en realidad, el Sr. Hurtado Infante se encontraba descansando y de permiso de sus labores como Sargento Mayor de Tercera de la Guardia Nacional Bolivariana.

28. Recuerda la fuente que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha señalado que se ha utilizado la emisión de órdenes de prisión preventiva de manera rutinaria, y no como una medida excepcional, sin ofrecer una justificación suficiente o adecuada. También ha señalado que tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias debido a que han fundado órdenes de aprehensión y prisión preventiva, y acusaciones en hechos y pruebas que no implicaban actos delictivos o sobre la base de los cuales no se podía individualizar la participación de la persona. Añade que incluso, en algunos casos, las detenciones y los cargos fueron sustentados en pruebas manipuladas, fabricadas u obtenidas mediante tortura o coacción<sup>3</sup>.

29. Alega la fuente que la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante fueron sometidos a desaparición forzada. Según la jurisprudencia del Grupo de Trabajo, la incomunicación en lugar desconocido es considerada, *prima facie*, una desaparición forzada, la cual ha sido universalmente calificada como una negación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, una grave y flagrante violación de los derechos humanos y libertades fundamentales

<sup>2</sup> A/HRC/45/33, párr. 115.

<sup>3</sup> A/HRC/48/69, párrs. 112 y 113.

proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y una forma particularmente grave de detención arbitraria<sup>4</sup>.

30. Agrega la fuente que el Grupo de Trabajo también ha establecido que la incomunicación y la desaparición forzada restringen los derechos a acceder a un abogado de su elección, a ser presentado sin demora ante autoridad judicial, así como a recurrir ante un juez la legalidad de la detención, lo que implica a su vez una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

31. Argumenta la fuente que la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante fueron objeto de desaparición forzada por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana a partir del momento de su detención. Al menos su familia no tuvo conocimiento de su paradero durante tres días debido a que los funcionarios alegaban que ellos no se encontraban recluidos en el lugar donde asistía su familia. Lo cual generó que estos no pudieran ingerir alimentos durante esos días. Incluso después de su detención y presentación ante el tribunal competente en la materia, los familiares de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante no tuvieron acceso a ellos durante varias semanas.

32. Agrega la fuente que la detención de la Sra. Infante Nares es arbitraria ya que, a pesar de haberse acogido a un procedimiento especial por admisión de los hechos, el juez no ha ordenado su excarcelación, la cual está supeditada al pago de un soborno.

33. Según la fuente, la Sra. Infante Nares, previa negociación con la Fiscalía, admitió un cargo de los varios que le atribuyeron con el fin de obtener una libertad anticipada. Se hizo así, a raíz de la presión ejercida por su propia defensa pública, quien la advirtió que, si no se acogían a esa opción, corría el riesgo de ser condenada por varios delitos más en la fase de juicio, ello en razón de que las detenciones ordenadas en el marco de la “Operación Trueno” eran órdenes directas del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

34. La condena de la Sra. Infante Nares a cinco años de prisión la habilita a acogerse a un beneficio procesal denominado “suspensión condicional de la pena”. Esta opción opera de pleno derecho para las personas que cumplan las condiciones reguladas en los artículos 482 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, el actual Juez del Tribunal Octavo en Funciones de Ejecución del área metropolitana de Caracas no ha ordenado la libertad porque el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no ha practicado el examen psicosocial que hace el pronóstico de clasificación mínima de seguridad del penado. Lo anterior es una excusa relacionada a la corrupción y ausencia de estado de derecho, porque para poder obtener este examen psicosocial, las personas deben pagar a las autoridades judiciales montos que ascienden hasta los 3.000 dólares.

35. Según la fuente, han transcurrido más de nueve meses desde que la Sra. Infante Nares decidió acogerse al beneficio procesal de admisión de los hechos, pero su excarcelación no se ha ordenado. Para la fuente, esta situación es violatoria del artículo 257 de la Constitución.

b. Categoría III

36. La fuente menciona que recientemente hay una operación de anticorrupción emprendida por la República Bolivariana de Venezuela que ha dado a conocer la existencia de tramas de corrupción por parte de los funcionarios de los órganos del sistema de justicia, lo cual ha generado una falta de imparcialidad en los procesos penales.

37. Argumenta la fuente que la detención de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante forma parte de un patrón desplegado por los funcionarios de los órganos del sistema de justicia en los procesos penales. Toda vez que aun cuando la Sra. Infante Nares admitió el único cargo que le fue imputado con el fin de obtener una libertad anticipada, esta continúa privada de libertad debido a que el Juez del Tribunal Octavo en Funciones de Ejecución del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas exige a sus familiares 3.000 dólares para tramitar la boleta de excarcelación. Además, manifiesta que cuando la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante estuvieron detenidos en San Juan de los Morros, los funcionarios de

<sup>4</sup> Opiniones núm.76/2017, párr. 59; y núm. 19/2019, párr. 34.

la Fiscalía 16ª del Ministerio Público exigieron a los familiares 200 dólares con objeto de que estos fuesen trasladados a la ciudad de Caracas para ser juzgados.

38. Argumenta la fuente que la imparcialidad se ha visto afectada por la cooptación de otros poderes públicos en el Poder Judicial. Una referencia de eso es que la “Operación Trueno”, donde resultaron detenidos la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante, proviene de una supuesta orden presidencial. Por lo anterior, la fuente alega que en el presente caso hay una violación al artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

39. La fuente recuerda que en el artículo 14, párrafos 2 y 3) c), del Pacto se estipula que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia y a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Adiciona que según la jurisprudencia del Grupo de Trabajo hay una relación entre el derecho a ser oído y el derecho a la presunción de inocencia, en razón de que ambos implican que las personas acusadas tienen derecho a ofrecer pruebas y testimonios relevantes para su defensa y que tanto el material probatorio como las personas que testifiquen sean examinadas por las partes en el juicio.

40. En el presente caso, los órganos del sistema de justicia no reconocen el derecho a la presunción de inocencia, toda vez que desde el momento en que inició el proceso penal contra el Sr. Hurtado Infante, este se encontraba privado de libertad sin que se haya determinado su culpabilidad, en virtud de medidas preventivas de privación de libertad. Lo que se busca con esta medida es socavar su inocencia mediante el sometimiento a una reclusión prolongada a causa del retardo procesal, la cual se evidencia en los seis diferimientos que ha sufrido el proceso del Sr. Hurtado Infante desde que inició la fase de juicio. Menciona la fuente que lo anterior ha impedido que Sr. Hurtado Infante pueda ofrecer pruebas y testimonios relevantes para su defensa.

41. Alega la fuente que las medidas preventivas de privación de libertad infringidas al Sr. Hurtado Infante también van en contravención a lo estipulado en la observación general núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos, en la cual se establece que una prolongación extrema de la reclusión en espera del juicio también puede comprometer la presunción de inocencia.

42. La fuente hace alusión al artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto en el que se estipula que, durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a garantías mínimas, en particular a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.

43. La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha señalado la existencia de una práctica por parte de los jueces de negar a las personas imputadas el derecho a una defensa de su elección en la audiencia de presentación o en la siguiente fase de investigación. También ha señalado que, incluso cuando las personas imputadas pudieron asegurarse una representación legal de su elección, se obstaculizó de diversas maneras la preparación de una defensa adecuada.

44. Si bien es cierto que la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante cuentan con una defensa pública, ello fue debido a que el juez del tribunal de control les negó la posibilidad de designar a un abogado de su confianza. Esta situación ha generado que no exista una preparación adecuada de su defensa ya que estos no tienen una comunicación efectiva con esta.

45. La fuente concluye que, en el presente caso, hay violación de las debidas garantías de un juicio consagradas en el artículo 14, párrafos 1, 2, 3 b) y c), del Pacto.

c. Categoría V

46. La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha señalado que, en el marco de las operaciones de seguridad destinadas a combatir la delincuencia, las fuerzas de seguridad cometen detenciones y reclusiones arbitrarias. Además, se han identificado conductas o patrones

desplegados por las fuerzas de seguridad, tales como la realización de estas operaciones principalmente en barrios urbanos de bajos ingresos<sup>5</sup>.

47. La fuente argumenta que las detenciones de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante forman parte de un patrón desplegado por las fuerzas de seguridad en los operativos de seguridad, el cual radica en una discriminación por motivos de condición social y posición económica a raíz de la situación de pobreza.

48. Agrega la fuente que la familia Infante se volvió un objetivo de los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro durante la “Operación Trueno” por vivir en un sector de bajos recursos económicos, relacionado socialmente con la criminalidad, como lo es el sector Peña de Mota de la parroquia Altagracia de Orituco. También indica que esta situación fue utilizada como pretexto por los funcionarios para relacionar a la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante con los miembros del “Tren del Llano” y, por lo tanto, detenerlos, para que posteriormente fueran imputados por delitos de terrorismo.

49. Otro factor relevante de discriminación fue que, al momento de la detención, los funcionarios hurgaron en sus pertenencias e identificaron una boleta de excarcelación emitida por un tribunal penal. Esta situación hizo que los funcionarios actuaran con violencia en contra de varios miembros de la familia, acusándolos de criminales confesos a pesar de que dicha boleta decía que habían sido liberados porque la Fiscalía no había encontrado evidencia que los incriminara.

#### **b) Respuesta del Gobierno**

50. El Grupo de Trabajo, de conformidad con sus métodos de trabajo, transmitió los alegatos de la fuente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el 8 de junio de 2023, y le solicitó que presentase una respuesta a más tardar el 7 de agosto de 2023. El Gobierno solicitó una extensión del plazo para contestar, la cual fue concedida. El Grupo de Trabajo recibió la respuesta del Gobierno el 6 de septiembre de 2023, en el plazo establecido.

51. El Gobierno, en su respuesta, señala que, el proceso penal seguido en contra de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante se relaciona con su presunta colaboración con el “Tren del Llano”. Indica el Gobierno que ambas personas fueron detenidas el 26 de abril de 2022, por funcionarios debidamente uniformados e identificados de la Dirección de Investigaciones Penales perteneciente al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, quienes se encontraban desplegados en el marco de un dispositivo de seguridad denominado “Operación Trueno 2022”, realizado en el estado Guárico, con el objetivo de contrarrestar las acciones delictivas desarrolladas por el “Tren del Llano”.

52. La captura se produjo cuando los funcionarios policiales visualizaron a dos personas (las hermanas Silva Beroes)<sup>6</sup>, hacia quienes procedieron a emitir la voz del alto, habiendo estas intentado huir de la comisión policial, lo que generó una persecución que terminó en la vivienda de la Sra. Infante Nares y su hijo el Sr. Hurtado Infante.

53. Afirma el Gobierno que, al registrar la mencionada vivienda, los oficiales policiales, en presencia de dos testigos, encontraron un saco de material sintético de color blanco, el cual contenía en su interior: cinco cañones dobles de escopeta, diez cañones de escopeta de calibre 16 mm, ocho empuñaduras para escopeta elaboradas de material de madera, un binocular de alto alcance, cuarenta municiones de calibre 7,62 por 39 mm y una granada de humo. En la parte posterior a la vivienda fue hallada una motocicleta.

54. El Gobierno informa que, horas más tarde, se apersonaron en la vivienda la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante, indicando residir en ese lugar. Visto el hallazgo de objetos y material de interés criminalístico que podría comprometerlos en la comisión de delitos, ambos ciudadanos fueron detenidos en condición de flagrancia por los funcionarios policiales.

<sup>5</sup> A/HRC/48/69, párr. 6 a).

<sup>6</sup> Véase la opinión núm. 54/2023.

55. Cita el Gobierno el ordenamiento jurídico nacional que autoriza hacer esta clase de requisas y detenciones, así como proceder a allanar la vivienda mencionada de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, el cual lo autoriza “cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión”. El Gobierno insiste en que en esta vivienda buscaron refugio las personas a las que se perseguía por haber desoído la voz de “alto” de la policía.

56. Tanto la Sra. Infante Nares como el Sr. Hurtado Infante, luego de detenidos, fueron trasladados inmediatamente hasta la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. Posteriormente, al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, a los fines de realizar el respectivo examen médico-legal, y a la Sala de Reseña del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para la aplicación de la identificación plena y la certificación de datos filiatorios. La aprehensión quedó registrada bajo las actas procesales CNPB-005-041GUINV-SP-GD-000659-2022. El Gobierno adjunta dos actas que establecen el buen estado de salud y la falta de cualquier tipo de lesión en ambos detenidos.

57. Afirma el Gobierno que, como producto de la verificación de registros policiales, se pudo constatar que ambos detenidos tenían antecedentes penales. La Sra. Infante Nares fue detenida en diciembre de 2020 por tráfico de armas, mientras que el Sr. Hurtado Infante fue detenido en diciembre de 2020 por tráfico de armas y en noviembre de 2010 por la comisión de un homicidio intencional.

58. El Gobierno afirma que las detenciones se produjeron en flagrante delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución y el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.

59. Los detenidos fueron notificados por los funcionarios de la Policía Nacional tanto de los motivos de su detención como de los derechos que los asisten, tal como consta en los dos anexos que acompaña el Gobierno.

60. También se agregan las actas de notificación de tales acciones, en las que constan las firmas legibles de ambos ciudadanos, cumpliéndose de esta forma la disposición del Comité de Derechos Humanos, quien ha precisado que “con la notificación oral de las razones de la detención se satisface el requisito de informar al detenido”<sup>7</sup>.

61. El Gobierno manifiesta que las actuaciones en el presente caso fueron realizadas por la Dirección de Investigaciones Penales perteneciente al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana actuando como un órgano de investigación penal, dejándose constancia de que ambas detenciones fueron efectuadas por personas autorizadas para ello, de conformidad con las atribuciones que les confiere la ley.

62. Explica el Gobierno que, el día 27 de abril de 2022, ambos detenidos fueron llevados ante el Tribunal Penal Estatal y Municipal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de San Juan de los Morros (estado Guárico), con el objeto de realizar la audiencia oral de presentación de imputados, prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo puestos a la disposición de un juez dentro de las 48 horas siguientes a la detención. Esta audiencia se realizó junto a dos personas involucradas en la causa (las hermanas Silva Beroes)<sup>8</sup>.

63. En la audiencia de presentación, ambos indiciados indicaron que no contaban con abogados privados, por lo que el Tribunal procedió a juramentar a una defensa pública que los asistiera. El Gobierno rechaza la afirmación de la fuente pues no hubo impedimento para nombrar defensa privada en la referida audiencia.

64. Informa el Gobierno que el Tribunal de la causa declinó su competencia, conforme a los artículos 71 y 80 del Código Orgánico Procesal Penal, cediéndosela al tribunal de guardia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional del área metropolitana de Caracas, por tratarse de la presunta comisión de delitos contra el orden público, los cuales se encuentran

<sup>7</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 26.

<sup>8</sup> Véase la opinión núm. 54/2023.



establecidos en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; así como en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

65. Afirma el Gobierno que, en el desarrollo de la mencionada audiencia, ni la Sra. Infante Nares, ni el Sr. Hurtado Infante o su defensa legal denunciaron las supuestas violaciones a los derechos humanos durante su detención, las cuales, de manera insólita han sido presentadas y denunciadas por primera vez ante el Grupo de Trabajo.

66. El Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional y competencia para conocer y decidir en delitos asociados a corrupción y delincuencia organizada, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, celebró la nueva audiencia, venida en cesión de competencia, el día 16 de mayo de 2022. En este acto, ambos indiciados manifestaron igualmente no tener abogados privados y se acogieron a los nombrados por el Estado de acuerdo con la ley. En esta audiencia los indiciados o su defensa legal tampoco presentaron ninguna queja respecto a la forma en que se estaba desarrollando el procedimiento penal.

67. Informa el Gobierno que el tribunal de la causa admitió la precalificación de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas y municiones imputados por el Ministerio Público a la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante. El delito de conspiración fue desestimado por el tribunal de la causa.

68. También hace conocer el Gobierno que el tribunal de la causa acordó seguir el procedimiento ordinario y mantener la medida de privación preventiva de libertad para la Sra. Infante Nares en el Instituto Nacional de Orientación Femenina y para el Sr. Hurtado Infante en el Internado Judicial Región Capital “Rodeo II”. También, ordenó la evaluación médica completa para ambos procesados, garantizando de esta manera el derecho humano a la salud.

69. El Gobierno establece que, para acordar la privación judicial preventiva de libertad, el tribunal de la causa realizó una evaluación detallada sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia de esta medida de coerción personal, a saber: un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido o es partícipe en la comisión de un hecho punible y la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

70. El Gobierno subraya que la Sra. Infante Nares sin presión de ninguna clase decidió, durante la audiencia preliminar, acogerse al procedimiento de admisión de los hechos, previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Vista esta libre admisión, el juez dictó sentencia condenatoria por admisión de los hechos a la Sra. Infante Nares, imponiendo una pena de cinco años de prisión.

71. En cuanto al Sr. Hurtado Infante, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional, visto que libre de apremio y coacción decidió no admitir los hechos; el Tribunal mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad y ordenó el pase a juicio oral y público.

72. Explica el Gobierno que, desde 2004, el Tribunal Supremo de Justicia —máxima instancia judicial del país— acordó, mediante la Resolución núm. 2004-0217 de 22 de noviembre de 2004, concentrar el conocimiento de las causas relacionadas con el terrorismo en determinados tribunales de control del país a los fines de favorecer la especialización. Por ello, en el presente caso se cumple con el principio fundamental y requisito imprescindible establecido en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

73. El Gobierno establece que, en la actualidad, la Sra. Infante Nares permanece cumpliendo sentencia en las instalaciones del Centro de Control y Resguardo del Detenido, centro femenino, de la sede de “El Valle” de la Policía Nacional Bolivariana. El Sr. Hurtado Infante permanece detenido, por decisión judicial, en las instalaciones del Centro de Control

y Resguardo del Detenido, centro masculino, de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como “Zona 7”, ubicado en Boleíta.

74. Durante el proceso penal, la Sra. Infante Nares admitió ser responsable de los delitos por los que fue acusada por el Ministerio Público. En este sentido, el Gobierno hace conocer al Grupo de Trabajo que niega lo señalado por la fuente, puesto que el hecho de acogerse al procedimiento especial de admisión de los hechos en ningún momento implica que la persona quedará en libertad de manera inmediata sobre la base de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para que dicho beneficio de suspensión condicional pueda acordarse, tiene que cumplirse con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, incluido un pronóstico de clasificación de mínima seguridad del penado o penada, emitido de acuerdo con la evaluación realizada por un equipo técnico, designado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. La Sra. Infante Nares se encuentra siguiendo las diferentes etapas de tal proceso, y se informa que esta aún no ha superado el examen necesario para recobrar su libertad.

75. El Gobierno manifiesta que en ningún momento el Estado o sus instituciones cobran por ninguno de los procedimientos, dejando claro que es el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario la institución garante de la debida aplicación de los exámenes psicosociales, según la ley.

76. Rechaza el Gobierno la afirmación de que se haya discriminado a los detenidos por algún motivo, pues su detención fue aplicada por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico, sin considerar las condiciones particulares de las personas aprehendidas y sin menoscabo de lo establecido en los artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2 y 26 del Pacto.

#### **c) Comentarios adicionales de la fuente**

77. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente el 6 de septiembre de 2023, y le solicitó sus comentarios y observaciones finales, que fueron recibidos el 21 de septiembre de 2023.

78. La fuente, en sus comentarios adicionales, rebatió que los aprehendidos hubieran sido detenidos en flagrancia en el seguimiento de las hermanas Silva Beroes (las cuales son sujetos de la opinión núm. 54/2023), pues en la respuesta transmitida por el Gobierno al Grupo de Trabajo en el caso de las hermanas Silva Beroes, el Gobierno afirmó que la aprehensión de estas ocurrió el 27 de abril de 2022, es decir, un día después de la fecha que se afirma en la presente respuesta. El Gobierno también afirmó en esa respuesta que su aprehensión se dio en la residencia de las hermanas Silva Beroes y no en la residencia de la familia de la Sra. Infante y Hurtado Infante. Adiciona la fuente que el Gobierno no anexó en su respuesta las actas procesales a las que este hace referencia y en las cuales quedaron registradas las detenciones en condición de flagrancia; a pesar de que la carga de la prueba recaiga sobre el Estado.

79. Afirma la fuente que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se ha referido a estos casos de allanamientos y detenciones ilegales, señalando que se producen con regularidad y que no se cumplen en ellos las disposiciones legales<sup>9</sup>. Recientemente se refirió a estas violaciones en el marco de la “Operación Trueno 2022”, señalando que los familiares de las personas detenidas denunciaron que las autoridades llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias<sup>10</sup>, en las cuales las fuerzas de seguridad fabricaron pruebas inculpativas en su contra para justificar el argumento de la flagrancia.

80. La fuente presenta en sus comentarios adicionales un largo análisis sobre la situación en general de la República Bolivariana de Venezuela, así como un recuento de los actos ilegítimos cometidos en el marco de las operaciones de seguridad destinadas a combatir la delincuencia. También describe actos de hostigamiento y persecución contra la familia de la

<sup>9</sup> A/HRC/48/69, párrs. 60 y 84.

<sup>10</sup> A/HRC/54/57, párr. 94.

Sra. Infante y Hurtado Infante y adjunta copia de la denuncia en relación con estos actos ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

## 2. Deliberaciones

81. El Grupo de Trabajo agradece a las partes la información suministrada.

82. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones<sup>11</sup>.

83. Teniendo en cuenta las discrepancias en relación con los hechos denunciados por la fuente y la respuesta del Gobierno y siguiendo la práctica del Grupo de Trabajo, es este el que debe determinar qué versión de los hechos considera más creíble sobre la base de la información proporcionada. Por un lado, el Grupo de Trabajo observa que la fuente ha proporcionado un relato detallado y coherente de las circunstancias de la detención y del caso, más aún, cuando el presente caso se refuerza con uno de similares acciones, procedimientos y características<sup>12</sup>. El Grupo de Trabajo toma nota de sus opiniones anteriores sobre situaciones similares en la República Bolivariana de Venezuela<sup>13</sup>.

84. Después de una valoración detallada de las pruebas presentadas y de los asertos tanto de la fuente como del Gobierno, comparando las circunstancias, siguiendo la sucesión de los hechos muy comprensible y detallada descrita por ambas partes y procediendo a examinar el valor de cada una de sus pruebas, el Grupo de Trabajo llega a la siguiente opinión.

### a) Categoría I

85. El Grupo de Trabajo no está persuadido de que la detención de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante haya sido lícita, pues en el relato de los hechos se encuentran elementos que, en su opinión, no son convincentes. Manifiesta el Gobierno que la Policía Nacional se encontraba en persecución de otras personas y que en tal persecución llegaron a un domicilio, el cual allanaron en ausencia de sus legítimos dueños. Estos, a su vez se presentaron varias horas después en el lugar y allí fueron capturados por la Policía, puesto que en el mencionado allanamiento encontraron una serie de armamentos. Para el Grupo de Trabajo no resulta aceptable que se allane un domicilio mientras se persigue a otras personas, así como que la Policía permanezca en ese lugar varias horas y que luego proceda a detener a los legítimos habitantes, pues de esta narrativa se deduce que la Policía ni siquiera sabía de quién era el domicilio, entre otras incongruencias que se encuentran en la relación de los hechos.

86. Adicionalmente, mientras que el Gobierno afirma que la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante fueron detenidos el 26 de abril de 2022, la fuente manifiesta que la fecha de detención fue el 24 de abril de 2022. El Grupo de Trabajo observa que las noticias sobre la detención indican que estas se produjeron el sábado anterior, que sería el 23 de abril (dado que las noticias están fechadas el 28 de abril)<sup>14</sup>. Estas incoherencias afectan negativamente la confiabilidad de las fechas y la narrativa del Gobierno sobre las detenciones. Por el contrario, el relato de la fuente y las declaraciones adjuntas son coherentes, precisas y contienen puntos de referencia específicos. Sobre esta base, el Grupo de Trabajo considera que el relato de la fuente sobre la fecha de la detención es más creíble que el del Gobierno.

87. Así pues, la fuente sostiene que las detenciones fueron arbitrarias con arreglo a la categoría I porque ni a la Sra. Infante Nares ni al Sr. Hurtado Infante se les mostraron órdenes de detención ordenadas por un juez ni fueron consecuencia de una situación de flagrancia. Al contrario, estas fueron el producto de un abuso de poder por parte de los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro quienes, sin contar con los documentos

<sup>11</sup> A/HRC/19/57, párr. 68.

<sup>12</sup> Véase la opinión núm. 54/2023.

<sup>13</sup> Véase la opinión núm. 14/2024.

<sup>14</sup> Véase <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/juzgaran-por-terrorismo-a-18-del-tren-del-llano/>.

habilitantes, allanaron la residencia de la familia Infante, arrestaron a la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante y, posteriormente, los detuvieron con apoyo de funcionarios de la Policía Nacional, alegando que habían encontrado seis cañones y seis culatas de escopeta y un tubo con municiones, pero sin ningún documento habilitante, como ya ha deducido el Grupo de Trabajo.

88. Afirma el Gobierno que estas detenciones se produjeron al constatar en los registros policiales que la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante tenían antecedentes penales. Insiste el Gobierno en que ambas detenciones se produjeron en flagrante delito, de conformidad con su legislación.

89. El Grupo de Trabajo recuerda que, en virtud de las disposiciones del derecho internacional, un arresto o una detención necesitan una autorización legal para ser lícitos. El Grupo de Trabajo ha establecido que las autoridades deben invocar la base jurídica y aplicarla a las circunstancias del caso. Esto normalmente se hace mediante una orden de aprehensión u orden de arresto (o un documento equivalente)<sup>15</sup>. Los motivos de la detención deben proporcionarse inmediatamente después de la detención y deben incluir no solo la base legal general de la detención, sino también suficientes detalles fácticos que sirvan de base a la denuncia, como el acto ilícito cometido y la identidad de la presunta víctima<sup>16</sup>.

90. Las personas detenidas tienen derecho a ser informadas sin demora de los cargos que se les imputan. Esto es inherente al artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como a los principios 2 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Estas disposiciones también exigen que los procedimientos para llevar a cabo la privación de libertad legalmente autorizada estén establecidos por ley y que los Estados partes garanticen su cumplimiento, incluso especificando cuándo se requiere una orden de detención. Si no se respetan esos procedimientos, una detención es arbitraria y socava gravemente la capacidad de llevar a cabo una defensa jurídica adecuada.

91. El Grupo de Trabajo, al examinar las actas que acompaña el Gobierno, infiere que estas fueron emitidas posteriormente a la ocurrencia de los hechos, por lo que la detención de los ciudadanos mencionados no pudo haberse llevado en flagrante delito ni tampoco en cumplimiento de las exigencias contenidas en los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 9, párrafo 1, del Pacto, así como de la observación núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos (párr. 33) y de los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión<sup>17</sup>. Sobre esta base fáctica el Grupo de Trabajo considera que la detención de la Sra. Infante Nares y del Sr. Hurtado Infante carece de base legal.

92. Alega la fuente, que la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante fueron sometidos a desaparición forzada por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana a partir del momento de su detención. Al menos su familia no tuvo conocimiento de su paradero durante tres días debido a que los funcionarios alegaban que no se encontraban reclusos en el lugar donde se encontraba su familia (San Juan de los Morros, estado Guárico). Esta situación se tradujo en que los detenidos no pudieran ingerir alimentos durante esos días. Incluso posteriormente a su detención y presentación ante el tribunal competente en la materia, los familiares de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante no tuvieron acceso a ellos durante varias semanas.

93. El Grupo de Trabajo señala con alarma que, según se establece su jurisprudencia, la incomunicación en lugar desconocido es considerada, *prima facie*, una desaparición forzada, la cual ha sido universalmente calificada como una negación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y una grave y flagrante violación de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y una forma particularmente grave de detención arbitraria<sup>18</sup>. Al respecto, el Gobierno no ha refutado estas

<sup>15</sup> Opinión núm. 4/2023, párr. 64.

<sup>16</sup> Opinión núm. 85/2021, párr. 69.

<sup>17</sup> Opiniones núm. 3/2018, párr. 43; y núm. 10/2018, párr. 46.

<sup>18</sup> Opiniones núm. 76/2017, párr. 59; y núm. 19/2019, párr. 34.

circunstancias expresando únicamente que “todas las actividades y procedimientos se realizaron de conformidad con la ley”.

94. El Grupo de Trabajo concuerda con la afirmación de la fuente de que la incomunicación y la desaparición forzada restringen los derechos del detenido a acceder a un abogado de su elección, a ser presentado sin demora ante la autoridad judicial, lo que implica, a su vez, una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. En este caso, el Grupo de Trabajo decide remitir este procedimiento al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que adopte las medidas apropiadas.

95. El Grupo de Trabajo enfatiza que en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto se dispone que toda persona detenida será llevada sin demora ante un juez; mientras que en el artículo 9, párrafo 4, se señala que la persona detenida debe tener derecho a recurrir la legalidad de su detención ante un tribunal. El control judicial de la detención es una salvaguardia fundamental para la libertad personal<sup>19</sup> y es esencial para garantizar que tenga fundamento jurídico. En ese sentido, 48 horas son normalmente suficientes para cumplir el requisito estipulado en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, de hacer comparecer al detenido ante un juez “sin demora”. Toda tardanza debe ser absolutamente excepcional y estar justificada por las circunstancias particulares del caso<sup>20</sup>.

96. El Grupo de Trabajo observa que ni la Sra. Infante Nares ni el Sr. Hurtado Infante fueron llevados rápidamente ante un tribunal y no pudieron impugnar la legalidad de su detención, ya que la primera autoridad judicial declinó su competencia en favor de un tribunal especializado. Por lo tanto, ambos detenidos tuvieron que esperar a una nueva audiencia que se llevó a cabo el 16 de mayo de 2022. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo no está convencido de que los detenidos hayan sido llevados ante un tribunal dentro de las primeras 48 horas de su arresto, ni de que se les haya garantizado su derecho a impugnar la legalidad del arresto ante un tribunal.

97. De este modo, el Grupo de Trabajo concluye que a la Sra. Infante Nares y al Sr. Hurtado Infante les fue negado el derecho efectivo a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la legalidad de su detención inicial, en contra de los artículos 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto y el principio 32 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Asimismo, fueron sustraídos del amparo de la ley durante los primeros días de su detención, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>21</sup>.

98. En consecuencia, el Grupo de Trabajo establece que ha habido diversas violaciones del artículo 9 del Pacto y del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que la detención de los dos detenidos es arbitraria y se enmarca en la categoría I.

#### **b) Categoría III**

99. El Grupo de Trabajo se adhiere a los principios del derecho internacional de los derechos humanos, por los que se reconoce que toda persona tiene el derecho a que en el curso del procedimiento que se incoara en su contra se le han respetado los elementos fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial, por lo que el Grupo de Trabajo procederá a examinar los hechos bajo esas premisas.

100. Argumenta la fuente que, aunque la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante cuentan con una defensa pública, ello es debido a que el juez del tribunal de control les negó a ambos la posibilidad de designar a un abogado de su confianza. Esta situación ha generado que no exista una preparación adecuada de su defensa ya que estos no tienen una comunicación efectiva con esta, violándose así las debidas garantías de un juicio consagradas en los artículos 14, párrafos 1, 2 y 3 b) y c), del Pacto. Sin embargo, el Gobierno señala que cuando los detenidos manifestaron que no contaban con abogados, el Tribunal procedió a juramentar

<sup>19</sup> A/HRC/30/37, párr. 3.

<sup>20</sup> Opinión núm. 56/2019, párr. 80.

<sup>21</sup> Opiniones núm. 76/2017, párr. 58; y núm. 61/2020, párr. 70; y A/HRC/29/26/Add.2, párr. 108.

a dos defensores públicos para que los asistan, en absoluto respeto al debido proceso y al derecho de defensa.

101. Informa la fuente que ni siquiera el abogado público ni la familia recibieron copias de los expedientes judiciales en contra de los detenidos. Aunque el Grupo de Trabajo señala que la ley per se no exige que se proporcionen copias de un expediente, señala con vehemencia que se requiere el acceso a los documentos y pruebas pertinentes para garantizar la efectividad de los derechos consagrados en el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto. Ello concuerda con el Comité de Derechos Humanos en su observación general núm. 32 (2007), quien ha indicado que los medios adecuados para llevar a cabo la defensa deben incluir el acceso a documentos y otras pruebas, incluidos todos los materiales que la fiscalía pretenda presentar ante el tribunal contra el acusado o que constituyan prueba exculpatória. El Gobierno, sin embargo, deja claro que “la señora Argelia Margarita Infante Narez y el señor Yohimel Alexair Hurtado Infante desde el momento de su detención hasta la fecha han tenido pleno contacto con sus abogados defensores, quienes han podido representarlos plenamente durante todo el proceso”.

102. El Grupo de Trabajo, luego de analizar las diferentes declaraciones de la fuente, no está convencido de que los abogados no hayan tenido acceso a los expedientes ya que es claro que las peticiones y acuerdos alcanzados con las autoridades son el resultado de una defensa adecuada, oportuna y bien preparada.

103. El Grupo de Trabajo tiene conocimiento de que ambos imputados residen en el sector Las Vueltas, Peña de Mota, parroquia Altagrancia de Orituco (municipio José Tadeo Monagas, estado Guárico), lugar donde la policía alega que se cometió el crimen. Sin embargo, ambos imputados fueron trasladados a Caracas porque todos los casos que venían de Altagrancia de Orituco fueron remitidos a Caracas.

104. El Grupo de Trabajo ha considerado reiteradamente en su jurisprudencia que el enjuiciamiento criminal de personas acusadas por delitos cometidos en un determinado territorio, por parte de tribunales ubicados en otra jurisdicción, constituye una violación del derecho a ser juzgado por el juez competente o natural, cuando la legislación nacional le atribuye expresamente la competencia a otra jurisdicción de la localidad donde se cometió el supuesto delito<sup>22</sup>. Sin embargo, el Gobierno ha explicado que todos los delitos calificados como terrorismo deben ser juzgados mediante proceso especial una vez que los jueces hayan determinado que así es. En la presente situación, el juez concedió competencia a los jueces especiales ubicados en otros lugares. Por tanto, el Grupo de Trabajo no está convencido de la afirmación de la fuente.

105. Según la fuente, la Sra. Infante Nares, previa negociación con la Fiscalía, admitió un cargo de los varios que se le atribuyeron con el fin de obtener una libertad anticipada. Se hizo así con posterioridad a la presión ejercida por su propia defensa pública, la que advirtió que, si no se acogía a esa opción, corría el riesgo de ser condenada por varios delitos más en fase de juicio, puesto que las detenciones eran ordenadas en el marco de la “Operación Trueno” directamente por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Agrega la fuente que la condena de la Sra. Infante Nares a cinco años de prisión la habilita a acogerse a un beneficio procesal denominado “suspensión condicional de la pena”. Dicha opción opera de pleno derecho para las personas que cumplan las condiciones reguladas en los artículos 482 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

106. Sin embargo, y a pesar de que la Sra. Infante Nares se acogió a tal beneficio, el actual Juez del Tribunal Octavo en Funciones de Ejecución del área metropolitana de Caracas no ha ordenado la libertad porque el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no ha practicado el examen psicosocial que hace el pronóstico de clasificación mínima de seguridad del penado. Alega la fuente que lo anterior es una excusa relacionada con la corrupción y ausencia de estado de derecho, porque para poder obtener este examen psicosocial, las personas deben pagar a las autoridades judiciales montos que ascienden hasta 3.000 dólares.

<sup>22</sup> Opiniones núm. 28/2014, párr. 46; núm. 30/2014, párr. 51; núm. 1/2015, párrs. 31 y 34; núm. 6/2019, párr. 135; núm. 12/2019, párr. 121; núm. 43/2019, párr. 77; y núm. 58/2021, párr. 85.

107. Según la fuente, han transcurrido más de nueve meses desde que la Sra. Infante Nares decidió acogerse al beneficio procesal de admisión de los hechos, pero su excarcelación no se ha ordenado. Sin embargo, aquí el Gobierno explicó que el hecho de acogerse al procedimiento especial de admisión de los hechos en ningún momento implica que la persona será puesta en libertad de inmediato, sobre la base de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para que se otorgue este beneficio de suspensión condicional, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, incluyendo un pronóstico de la clasificación de mínima seguridad del condenado, emitido de acuerdo con la evaluación realizada por un equipo técnico, designado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. El Gobierno insiste en que en ningún momento el Estado o sus instituciones cobran por dicho procedimiento.

108. Por su parte, el Sr. Hurtado Infante no admitió los cargos imputados; por lo tanto, su caso pasó al Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio con competencia exclusiva a nivel nacional para conocer de causas vinculadas con delitos de terrorismo. La fuente informa al Grupo de Trabajo que el juicio ha sido diferido en seis ocasiones, manteniéndose al Sr. Hurtado Infante privado de libertad.

109. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con la observación general núm. 32 (2007) del Comité de Derechos Humanos, el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley. El artículo 14 del Pacto tiene por objeto velar por la adecuada administración de la justicia y, a tal efecto, garantiza una serie de derechos específicos. Todos estos elementos le han sido conculcados a la Sra. Infante Nares y al Sr. Hurtado Infante.

110. El Grupo de Trabajo señala como uno de los vicios de procedimiento el hecho de que la audiencia de formulación de cargo contra el Sr. Hurtado Infante fuese suspendida seis veces. En el caso de la Sra. Infante Nares, el Gobierno ha demostrado que es necesario cumplir ciertos requisitos para otorgar el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Según las afirmaciones que ha transmitido la fuente en sus comentarios adicionales, las autoridades judiciales cobran para la realización de procedimientos que conllevan a la libertad.

111. Según los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3 c), del Pacto, toda persona arrestada o detenida por un cargo penal tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y sin demoras indebidas. La razonabilidad de cualquier demora en llevar un caso a juicio debe evaluarse según las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta la complejidad del caso, la conducta del acusado y cómo trataron el asunto las autoridades.

112. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo concluye que parte de la información proporcionada por la fuente y no desvirtuada por el Gobierno evidencia un grave impacto en la capacidad de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante de beneficiarse de las normas internacionales de derechos humanos relativas a un juicio justo sin dilaciones indebidas, según lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo clasifica la detención de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante como arbitraria de conformidad con la categoría III.

#### **c) Categoría V**

113. La fuente ha indicado que la detención arbitraria de la Sra. Infante Nares y del Sr. Hurtado Infante también se enmarca en la categoría V, puesto que dicha detención se basa en su condición de pobreza. Sin embargo, el Grupo de Trabajo no está convencido de que estas detenciones hayan tenido lugar en el contexto de algún tipo de discriminación.

#### **d) Observaciones finales**

114. Este es uno de varios casos presentados ante el Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la detención arbitraria en la República Bolivariana de Venezuela<sup>23</sup>. A juicio

<sup>23</sup> Opiniones núms. 73/2020, 57/2020, 44/2020, 20/2020, 81/2019, 80/2019, 75/2019, 40/2019, 39/2019, 86/2018, 72/2018, 49/2018, 41/2018, 32/2018, 87/2017, 84/2017, 52/2017 y 37/2017.

del Grupo de Trabajo, esto representa una práctica sistemática de privar a las personas de su libertad sin respetar los derechos consagrados en el derecho internacional. El encarcelamiento generalizado o sistemático, en violación de las normas del derecho internacional, puede constituir crímenes de lesa humanidad<sup>24</sup>.

115. El Grupo de Trabajo agradecería la oportunidad de trabajar de manera constructiva con el Gobierno para abordar problemas concernientes a la detención arbitraria y, visto el recurrente patrón de detenciones arbitrarias constatadas por este mecanismo internacional de protección de derechos humanos en los últimos años, el Gobierno debería considerar favorablemente invitar al Grupo de Trabajo para que lleve a cabo una visita oficial al país. Dichas visitas son una oportunidad para que el Grupo de Trabajo entable un diálogo constructivo directo con el Gobierno, y con representantes de la sociedad civil, con miras a lograr una mayor comprensión de la situación de privación de la libertad en el país y las causas que sustentan la detención arbitraria.

### 3. Decisión

116. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Argelia Margarita Infante Nares y Yoeimer Alexair Hurtado Infante es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 6, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

117. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.

118. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a las Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

119. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

120. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

121. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### 4. Procedimiento de seguimiento

122. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante;

b) Si se ha investigado la violación de los derechos de la Sra. Infante Nares y el Sr. Hurtado Infante, y, de ser así, el resultado de la investigación;

<sup>24</sup> Opinión núm. 47/2012, párr. 22.



c) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República Bolivariana de Venezuela con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

d) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

123. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

124. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.

125. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>25</sup>.

*[Aprobada el 30 de agosto de 2024]*

---

<sup>25</sup> Resolución 51/8 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 6 y 9.